

Las necesidades desatendidas: refugiados colombianos en Ecuador

Marie-Hélène Verney

La reciente evaluación de las necesidades realizada por ACNUR le ha permitido identificar y empezar a cubrir importantes lagunas en materia de protección y asistencia entre los refugiados colombianos en Ecuador.

El continuo conflicto armado interno de Colombia ha desarraigado a millones de personas a lo largo de los años. La crisis es, mayoritariamente, de desplazamiento interno y afecta a unos tres millones de personas en Colombia, de una población total de 42 millones. Sólo en 2008, 250.000 colombianos tuvieron que desplazarse a otras zonas del país.

La dinámica del conflicto ha cambiado en los últimos años, trasladando su intensidad hacia las fronteras nacionales. En parte por este motivo, muchos colombianos se han refugiado en países vecinos, sobre todo Venezuela

a la sanidad, la educación y el empleo. Sin embargo, la falta de desarrollo, la gran inseguridad y el aumento del número de refugiados plantean una grave amenaza a la capacidad de Ecuador de proteger y atender adecuadamente las necesidades de los refugiados.

La evaluación de las necesidades

A pesar de no cubrir todas las necesidades, gracias a su excelente marco jurídico para el refugiado y a su compromiso nacional, Ecuador era un candidato ideal para convertirse en uno de los ocho países piloto del proyecto de Evaluación de las Necesidades Globales (GNA, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa, probada en 2008 y lanzada a principios de 2009, pretende planificar las necesidades reales de los refugiados, localizar lagunas y marcar el camino común a seguir por aquéllos, los Estados y otros socios [véase el recuadro en pág.61].

La mayoría de los refugiados no están registrados y su localización es incierta, lo cual dificulta enormemente la planificación de los programas de asistencia. El primer paso para definir las necesidades de los refugiados consistía en contar con su intervención sistemática y la de las comunidades locales a través de diversas evaluaciones de carácter participativo. Aunque el concepto de participación es fácil de entender, a menudo es muy difícil de poner en práctica. Muchos de los refugiados de Ecuador viven en lugares remotos de la jungla a los que es muy difícil acceder. Desde la oficina local de ACNUR en Lago Agrio, una pequeña aldea a unos pocos kilómetros de la frontera, llegar a algunas de esas comunidades supone dos días de travesía por el Amazonas en un pequeño barco. Muchas de estas evaluaciones participativas tuvieron lugar en pequeños asentamientos ribereños,

donde se habló con la comunidad en su conjunto y con grupos más reducidos para determinar las necesidades específicas de mujeres, jóvenes y ancianos.

La principal preocupación de los refugiados resultó ser la carencia de documentación, que limita el acceso a las ayudas materiales, la educación, el empleo o incluso la protección. La falta de inscripción se debe, en parte, a que las personas no la solicitan, bien porque tienen miedo de hacerlo o porque desconocen su derecho a reclamar asilo. Algunos son conscientes de sus derechos pero no tienen medios para alcanzar la oficina de registro más cercana y dependen de las visitas de ACNUR para poder solicitar asilo.

La encuesta realizada por ACNUR en 2008 revelaba que existen 130.000 personas no registradas que viven en una “situación similar a la del refugiado” en Ecuador, más de seis veces el número de refugiados oficiales. Los que con mayor probabilidad carecen de documentación son los indígenas y los afrocolombianos, mientras que las mujeres solteras y las niñas, sobre todo, corren el riesgo de sufrir abusos y de ser explotadas. El hecho de no estar registrado implica la ausencia de servicios estatales y la desprotección extrema. Los grupos armados extraoficiales son muy suspicaces con las personas que no tienen documentación porque consideran que intentan ocultar su identidad (por el hecho de pertenecer al “otro lado”). Muchas personas han sido asesinadas por no disponer de documentos identificativos. Otra práctica habitual es atar a un árbol a las personas sin documentación hasta que viene alguien que presta su testimonio sobre la identidad de la persona retenida. También el ejército y la policía tienden a sospechar de los indocumentados.

Desde 2002, ACNUR colabora con la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia para facilitar documentación en zonas de alto riesgo (áreas conflictivas cuya población sufre un grave peligro de desplazamiento). Gracias a esta campaña,



Misión de ACNUR en el río Putumayo para llegar a las comunidades aisladas.

y Ecuador. En la costa del Pacífico, el departamento de Nariño, donde se encuentran los principales grupos armados en activo, presenta la mayor tasa de desplazados, combates y asesinatos selectivos del país. Hacia el este, en la región amazónica, el departamento de Putumayo también sufre especialmente la inestabilidad y la violencia.

Ecuador ha mantenido una constante política de fronteras abiertas, incluso en épocas de gran tensión entre ambos países, y en muchos aspectos la región constituye un modelo de integración local. No existen campos de refugiados: éstos viven entre la población ecuatoriana y tienen acceso

“Estoy enfermo y por ahora no puedo trabajar. El documento de identidad del refugiado ha sido una bendición para nosotros; ahora se lo podemos enseñar a la policía para que vea que somos legales en este país”.

Refugiado colombiano en Ecuador

más de 500.000 colombianos han recibido documentos de identidad o, al menos, certificados de nacimiento. En 2007, esta acción se centró en las comunidades indígenas. En algunas regiones, menos del 30% de la población disponía de algún documento identificativo.

El escaso desarrollo de la región, junto con las dificultades de acceso, obstaculizan la prestación de servicios básicos a los refugiados y a la población local. La seguridad constituye otro problema, sobre todo en las zonas fronterizas, donde la situación es tensa debido a que imperan la delincuencia y la trata. Ha habido cierta tendencia a asociar a los colombianos con esta inestabilidad, por lo que los refugiados están sufriendo las consecuencias. La mitad de ellos afirmaron que no confiaban en la policía ni en el sistema judicial, mientras que algunos denunciaron situaciones de acoso, detenciones arbitrarias y casos de violencia sexual.

Conclusiones para el futuro

Con toda esta información, ACNUR organizó una Consulta Nacional en Quito que reunió a ministros del gobierno, refugiados y representantes locales de todo el país, así como a diversas ONG y representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional. Más de 100 personas participaron en dicha reunión, que duró dos días y abordó seis cuestiones identificadas durante el análisis de las lagunas: el marco jurídico de la protección, el reforzamiento de las instituciones con responsabilidad sobre los refugiados, el cumplimiento de los derechos de éstos, la integración y el acceso a los servicios por parte de ellos y de las comunidades de acogida, el desarrollo de una cultura de paz y las iniciativas regionales para mejorar la protección al refugiado.

Al finalizar la Consulta, los participantes se comprometieron con un plan de actuación de dos años y el gobierno de Ecuador anunció una nueva Política de Protección del Refugiado que incluye medidas prácticas de inscripción rápida y equitativa, además de un plan de registro

mejorado a gran escala que comenzará a aplicarse en los próximos meses. Estas medidas deberían beneficiar a 50.000 o 60.000 personas y empezarán a ponerse en práctica a lo largo de la frontera septentrional mediante brigadas móviles de inscripción compuestas por empleados del gobierno y miembros de ACNUR. Las brigadas, que recibirán y procesarán solicitudes de asilo, visitarán comunidades de toda la región. Este ejercicio, que supone un gran desafío logístico y de desarrollo de la capacidad, está concebido para que los refugiados puedan disfrutar y acceder a los derechos y servicios básicos, así como para mejorar la planificación de los programas asistenciales.

Mientras tanto, la estrategia de ACNUR consiste en ayudar a los refugiados y a las comunidades locales a cubrir sus necesidades más urgentes, mediante proyectos como el Barco Fluvial Sanitario en la región amazónica. Desde agosto de 2008, esta clínica flotante, dotada de equipos y medicamentos básicos, se ha desplazado por 28 pequeños asentamientos de los ríos Putumayo y San Miguel, donde la malaria y otras enfermedades tropicales son endémicas. El barco ofrece atención médica de urgencia a la población que no dispone de otro



servicio de salud. Gracias a estos y otros proyectos, ACNUR sigue colaborando con sus socios para encontrar soluciones prácticas fundamentadas en la integración local, la opción más realista para la mayoría de los refugiados colombianos que temen regresar a su país mientras la violencia siga instalada en él.

Esta mujer quechua cruzó la frontera para refugiarse en Ecuador, donde ACNUR le facilitó documentación y un kit para construir una pequeña vivienda.

Marie-Helene Verney (VERNEY@ACNUR.org) es Oficial Regional de Información Pública de ACNUR Colombia.

Evaluación de las Necesidades Globales

En la primera fase de la Evaluación de las Necesidades Globales (GNA, por sus siglas en inglés) organizada por ACNUR participaron ocho países: Camerún, Ecuador, Georgia, Ruanda, Tailandia, Tanzania, Yemen y Zambia. Las tareas se centraban en evaluar las necesidades desatendidas de los refugiados, desplazados internos, retornados, solicitantes de asilo y apátridas. El objetivo consistía en calcular todas las necesidades, los gastos necesarios para satisfacerlas y las consecuencias que podían provocar las lagunas. La campaña GNA se diseñó para orientar la planificación, decisión y actuación de los gobiernos, socios, refugiados y otras personas de la competencia de ACNUR.

Los resultados del proyecto piloto, publicados en el informe Realidades de los refugiados (disponible en línea: <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6810.pdf>), revelaron ilustrativamente la existencia de grandes y preocupantes deficiencias en el ámbito de la protección e incluso de necesidades básicas como el alojamiento, la salud, la educación, la seguridad alimentaria, la salubridad y las medidas para prevenir la violencia sexual. Se constató que en los países piloto un alarmante 30% de las necesidades no estaban cubiertas, una tercera parte de las cuales correspondía a los servicios básicos. ACNUR ya trabaja en estos ámbitos, pero no con la intensidad necesaria.

Los resultados demostraron una clara necesidad de mejorar y garantizar el acceso a un sistema de asilo con mejores servicios de recepción, procedimientos, inscripciones, documentación y controles fronterizos. También se precisan formación y apoyo técnico para mejorar la capacidad de los gobiernos de dar una respuesta adecuada a los beneficiarios. Las mujeres y los niños requieren mayor protección y mejores medidas de prevención y respuesta contra los abusos y la violencia sexual, así como un refuerzo de los programas de protección del menor.

Véase <http://www.acnur.org/t3/eng/>

Para obtener más información sobre la GNA en Ecuador, consulte: <http://www.acnur.org/t3/eng/situacion-del-ecuador/>